



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE**

SALA PRIMERA DE DECISIÓN ORAL

Sincelejo, dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016)

Magistrado Ponente: MOISÉS RODRÍGUEZ PÉREZ

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-DIRECTOR DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN – POR NO DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA ACTORA.

SENTENCIA No. 021

I. OBJETO A DECIDIR

Corresponde a la Sala, proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, presentada por la señora ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, en contra de la NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL, por la presunta vulneración al derecho fundamental de petición y al debido proceso.

II. ACCIONANTE

La presente acción constitucional, la instauró la señora ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.208.640 de Tierra Alta, Córdoba

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

III. ACCIONADO

La acción está dirigida en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL.

IV. ANTECEDENTES

4.1. Pretensiones.

La señora ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, actuando en nombre propio, impetró acción de tutela¹ pretendiendo el amparo de su derecho fundamental de petición y al debido proceso; en consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene al Ministerio de Defensa Nacional – Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, a responder la petición de fecha 19 de febrero de 2016², en la que solicita el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales definitivas y copia del acto administrativo por medio del cual se reconocen dichos haberes.

4.2. Hechos.

La presente acción se sustenta en los siguientes hechos:

La accionante sostiene que, el día 19 de febrero de 2016, en calidad de madre del fallecido ex – soldado de las Fuerzas Militares de Colombia JOSÉ LUIS ESPITIA MARTÍNEZ, quien se identificaba con cédula de ciudadanía No. 78.742.511, presentó derecho de petición al Ministerio de Defensa Nacional-Director de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, solicitando el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales definitivas y copia del acto administrativo por medio del cual se reconocen dichos haberes.

Refiere que, la petición fue enviada a través de la Empresa de mensajería DEPRISA, el día 22 de febrero de 2016, con No. De guía 999025399102 recibida en la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional el día 23 de febrero de 2016, por lo que han pasado más de quince (15) días sin recibir respuesta por parte de la entidad antes mencionada.

¹ Fol. 1-3 del C. Ppal.

² Fol. 5 Ibídem.

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

V. TRÁMITE PROCESAL

La presente acción fue presentada el 07 de junio de 2016³, la cual fue admitida mediante auto del 08 de junio de la misma anualidad⁴ en donde se dispuso se diera curso a las notificaciones de rigor.

VI. CONTESTACIÓN

La entidad accionada no rindió informe en relación a los hechos que motivaron la presente acción constitucional.

VII. PRUEBAS

- Copia de la cédula de ciudadanía de la actora⁵.
- Copia simple del derecho de petición suscrito por la accionante el 19 de febrero de 2016, dirigido al Ministerio de Defensa y la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional⁶.
- Copia del certificado de registro civil de nacimiento del señor JOSÉ LUIS ESPITIA MARTÍNEZ⁷.
- Copia de guía de DEPRISA⁸.
- copia cédula de ciudadanía del señor JOSÉ LUIS ESPITIA MARTÍNEZ⁹.

VIII. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

8.1. La Competencia

El Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela en **PRIMERA INSTANCIA**, según lo establecido en su artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991.

8.2. El problema jurídico

De conformidad con los hechos expuestos, considera la Sala que el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar sí:

¿El Ministerio de Defensa - Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional viola el derecho fundamental de petición de la actora al no dar respuesta a su solicitud?

³ Fol. 10 del C. Ppal. Acta individual de reparto.

⁴ Folio 12 del C. Ppal.

⁵ Folio 15 reverso

⁶ Fol. 4 del C. Ppal.

⁷ Fol. 5 Ibidem.

⁸ Fol. 6 Ibidem.

⁹ Fol. 7-8 Ibidem.

⁹ Fol. 9 del C. Ppal.

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

Para arribar a la solución de lo planteado, se abordará el siguiente hilo conductor: (i) Generalidades de la acción de tutela; (ii) El derecho fundamental de petición; y (iii) Caso concreto.

8.3. Generalidades de la acción de tutela.

La Constitución Política de 1991, en su artículo 86, contempla la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante el ejercicio de la acción de tutela bajo las formas propias de un mecanismo preferente y sumario, la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares.

Se trata entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consiste en brindar a la persona la posibilidad de acudir sin mayores exigencias de índole formal y con la certeza de que obtendrá oportuna resolución a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que en su caso, consideradas sus circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de sus derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Constitucional.

Sin embargo, no debe perderse de vista que esta acción es de carácter residual y subsidiario; es decir, que sólo procede en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que le permita al actor solicitar, ante los jueces ordinarios, la protección de sus derechos, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, el cual debe aparecer acreditado en el proceso.

Al respecto, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 de la Constitución, prevé que la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como instrumento transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable. En ese sentido, el análisis de procedencia de la acción de tutela exige del juez constitucional la verificación de la inexistencia de otro medio de defensa judicial.

8.4. Presupuestos de efectividad del derecho fundamental de petición.

La Carta Política en su artículo 23, consagró el derecho de petición como derecho fundamental, precepto que, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, faculta a toda persona a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, o ante las organizaciones privadas en los términos que señale la ley.

En efecto, La Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

Contencioso Administrativo, en su artículo 13 sitúa que toda persona tiene derecho hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente, por escrito o a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos.

Así mismo, dispone que las peticiones se resolverán dentro de los 15 días hábiles siguiente a su recepción, y de no ser posible contestarla o resolverla en dicho término, *“la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”*. (Artículo 14 CPACA, sustituido por la Ley 1755 de 2015).

Así las cosas, el núcleo esencial del derecho de petición lo constituye, que el peticionario pueda obtener pronta y oportuna resolución a la petición formulada, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve, o se reserva para sí, el sentido de lo decidido.

En ese aspecto, el derecho de petición no sólo consiste en obtener una respuesta por parte de las autoridades, sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada. En consecuencia, se requiere que la respuesta se produzca dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, puesto que prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución.

En ese orden, la Corte Constitucional en la sentencia de revisión T-149/13, con ponencia del Magistrado Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, señaló las reglas básicas que rigen el derecho de petición, en el siguiente sentido:

“(...).4.1. Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, es una garantía fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 85), cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del Estado¹⁰, especialmente el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los deberes de protección para los cuales fueron instituidas la autoridades de la República (C.P. art. 2).¹¹

¹⁰ Para estudiar una de las primeras sentencias que examinó el Derecho de Petición como garantía de aplicación inmediata puede verse la sentencia T-012 del 25 de mayo de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

¹¹ En múltiples oportunidades la Corte se ha pronunciado sobre el sentido, alcance y ejercicio del derecho de petición, para tal efecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-12/92, MP: José Gregorio Hernández Galindo; T-419/92, MP: Simón Rodríguez Rodríguez; T-172/93, MP: José Gregorio Hernández Galindo; T306/93, MP: Hernando Herrera Vergara; T-335/93, MP: Jorge Arango Mejía; T- 571/93, MP: Fabio Morón Díaz; T-279/94, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-414/95, MP: José Gregorio Hernández Galindo; T-529/95, MP: Fabio Morón Díaz; T-604/95, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-614/95, MP: Fabio Morón Díaz; SU-166/99, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-307/99, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-079/01, MP: Fabio Morón Díaz; T116/01, MP(E): Martha Victoria Sáchica Méndez; T-129/01, MP: Alejandro Martínez Caballero; T-396/01, MP: Álvaro Tafur Galvis; T418/01, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-463/01, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-537/01, MP: Álvaro Tafur Galvis; T-565/01, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra ; T-1089/01, MP: Manuel José Cepeda Espinosa; T481/92, MP: Jaime Sanín Greiffenstein; T-159/93, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; T-056/94, MP: Eduardo Cifuentes

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

De ahí, que el referido derecho sea un importante instrumento para potenciar los mecanismos de democracia participativa y control ciudadano; sin dejar de mencionar que mediante su ejercicio se garantiza la vigencia de otros derechos constitucionales, como los derechos a la información y a la libertad de expresión¹².

4.2. Según su regulación legislativa, así como en el Decreto 01 de 1984, el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el ejercicio del derecho de petición¹³ entendido también como una actuación administrativa, debe someterse a los principios de economía, imparcialidad, contradicción, eficacia y especialmente publicidad y celeridad según lo estipula el Artículo 3o. del estatuto.

4.2.1. Tal como la anterior codificación, la vigente permite que las peticiones sean formuladas tanto en interés general como en relación con los asuntos de interés particular, y destaca la obligación de resolver o contestar la solicitud dentro de los días siguientes a la fecha de su recibo, salvo algunas excepciones¹⁴.

4.2.2. Igualmente, el anterior Código Contencioso establecía que la efectividad del derecho de petición constituía un deber esencial de las autoridades.¹⁵

En la misma línea, el conjunto normativo vigente señala como falta disciplinaria gravísima la desatención a las peticiones y a los términos para resolver, así como el desconocimiento de los derechos de las personas ante los servidores públicos y en ciertos casos, ante particulares.¹⁶

4.3. Entendido así, como garantía constitucional y legal, el ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos, supone el movimiento del aparato estatal con el fin de resolver la petición elevada e impone a las autoridades una obligación de hacer, que se traduce en el deber de dar pronta respuesta al peticionario.

Muñoz; T-076/95, MP: Jorge Arango Mejía; T-275/97, MP: Carlos Gaviria Díaz; y T1422/00, MP: Fabio Morón Díaz.

¹² Sobre la vigencia de otros derechos fundamentales que pueden garantizarse a través del derecho de petición pueden verse las sentencias T-1089 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

¹³ Mediante sentencia C-818 de 2011 esta Corporación advirtió que la declaratoria de inexecutable inmediata de los Artículos del Título II de la Ley 1437 de 2011, reglamentarios del derecho de petición, tendría graves efectos en materia de protección de este derecho fundamental, por cuanto a partir de su vigencia, esto es, el 2 de julio de 2012, se produciría un grave vacío legal con incidencia directa en el goce de dicha garantía.

¹⁴ Según el Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, la regla general contempla un término de 15 días para resolver las peticiones, pero en los casos de petición de documentos este término se reduce a 10 días para responder y 3 para entregar; y en la consulta se extiende a 30. Su parágrafo también señala que excepcionalmente, cuando no sea posible resolver en los términos indicados, la autoridad debe informar de inmediato al solicitante de la dicha situación, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta.

¹⁵ Decreto 01 de 1984: Artículo 31. Deber de Responder las Peticiones. “Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el Artículo 45 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades.”

¹⁶ Texto Original de la Ley 1437 de 2011: “Artículo 31. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.” En consecuencia, la Corte Constitucional difirió los efectos del fallo al 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso, expida la Ley Estatutaria correspondiente.

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

4.4. Justamente, este deber esencial de parte de la administración, que se deriva del mandato superior a obtener pronta resolución, ha sido desarrollado y sistematizado por esta

Corporación en conjunto con otros elementos característicos del derecho de petición, que conforman su núcleo fundamental.

4.5. La efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

4.5.1. En relación con los tres elementos iniciales¹⁷ resolución de fondo, clara y congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

4.5.2. Respecto de la oportunidad¹⁸ de la respuesta, como elemento connatural al derecho de petición y del cual deriva su valor axiológico, ésta se refiere al deber de la administración de resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo caso, no puede exceder del estipulado en la legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones formuladas.

4.5.2.1. Si bien en algunas oportunidades, la administración se encuentra imposibilitada para dar una respuesta en el lapso señalado por el legislador; en principio, esta situación no enerva la oportunidad o la prontitud de la misma, pues la autoridad está en la obligación de explicar los motivos y señalar un término razonable en el cual se realizará la contestación.

4.5.2.2. En estos casos, el deber de la administración para resolver las peticiones de manera oportuna, también debe ser examinado con el grado de dificultad o complejidad de la solicitud, ejercicio que de ninguna manera desvirtúa la esencialidad de este elemento, pues mientras la autoridad comunique los detalles de la respuesta venidera, el núcleo fundamental del derecho de petición, esto es, la certidumbre de que se obtenga una respuesta a tiempo, se mantiene.

4.5.3. Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo. Significa que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la respuesta al interesado¹⁹ Subrayado de la Sala Cabe recordar que el derecho de petición,

¹⁷ En la sentencia T-1160A de 2011, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte señala que la efectividad del derecho de petición consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada.

¹⁸ Sobre este elemento, pueden verse las sentencias T-159 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesay la T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En la primera, el actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido.

¹⁹ Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha tenido varias oportunidades de pronunciarse al respecto. Por ejemplo, en sentencia T-178/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición. Igualmente, en la sentencia T-615/98,

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la

recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.²⁰

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria²¹ de tal manera que logre siempre una constancia de ello.

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas.

4.6.3. Por supuesto, esta constancia no es homogénea en todos los casos, pues han de considerarse las particularidades de cada notificación según las condiciones del peticionario. Así, aunque en la mayoría de casos el medio regular sea la notificación por correo certificado, habrá situaciones que permitan la comunicación de la respuesta a través de medios electrónicos o digitales a solicitantes cuya facilidad de acceso a medios informáticos lo permita y mientras lo consientan; sin embargo, habrá situaciones en que la dificultad para ubicar al solicitante, aún por medios ordinarios, se intensifica, como cuando se trata de personas domiciliadas en zonas rurales o metropolitanas. En estos casos, especialmente, la administración debe adecuar su actuación a las circunstancias del peticionario y agudizar su esfuerzo por que la notificación sea lo más seria y real posible.

4.6.4. A partir de esta reflexión, es claro que si la entidad está obligada a tener una constancia de la comunicación con el peticionario para probar la notificación efectiva de su respuesta, con mayor razón el juez constitucional, para evaluar el respeto al núcleo esencial de tal garantía debe verificar la existencia de dicha constancia y examinar que de allí se derive el conocimiento real del administrado sobre la respuesta dada.

M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado. Y de manera similar en sentencia T- 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

²⁰ Sobre el mismo tema la sentencia T-553 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

²¹ Por ejemplo, en la sentencia T-545/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte concedió la tutela al derecho de petición en virtud de que la respuesta acerca del reconocimiento del derecho de pensión de la accionante había sido enviada a una dirección diferente a la aportada por ésta. Consideró la Corte que no había existido efectiva notificación a la peticionaria.

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

4.6.5. Como se anotó, la constancia no tiene que ser idéntica ni uniforme en todos los casos, pero a pesar de sus elementos diferenciadores, debe permanecer en ella la propiedad esencial que lleve al juez de tutela al convencimiento de que hubo notificación efectiva al interesado. Así, los soportes que generen una duda razonable en el juzgador constitucional, por su falta de aptitud, idoneidad o suficiencia probatoria, deben ser examinados con mayor rigor para determinar si se ajustan a la realidad y certeza de la notificación de la respuesta.

4.7. En síntesis, la garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información”. (“...”).

Así las cosas, es obligación de la entidad accionada emitir una respuesta oportuna y de fondo, atendiendo a los principios de suficiencia, congruencia y efectividad del derecho de petición; no quiere decir esto, que la respuesta tenga que ser positiva frente a lo solicitado, basta con que la misma se resuelva materialmente, satisfaga la necesidad, con sujeción a los requisitos antes mencionados.

8.5. Caso en concreto.

En el presente, caso como se expuso, la señora ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ pretende por vía de tutela la protección de su derecho fundamental de petición y al debido proceso, por considerar que se encuentra vulnerado por la Nación - Ministerio de Defensa – Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, al no darle respuesta oportuna a una solicitud que presentó mediante correo certificado, el 23 de febrero de 2016.

En este sentido, al plenario se allegó copia del escrito de petición aludido, por el cual la accionante, solicitó al Ministerio de Defensa – Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, i) información sobre el pago de prestaciones sociales definitivas, así como, ii) copia del acto administrativo con la cual se reconocieron esos haberes.

La anterior petición se envió mediante la empresa de correo certificado DEPRISA, con guía de envío No. 999025399102 el cual, una vez consultado en la página de internet de la empresa²², se pudo constatar que se recibió por parte de la accionada el día 23 de febrero de 2016; por tanto, a partir de entonces la entidad accionada contaba con quince (15) días hábiles para resolver dicha petición, conforme las consideraciones expuestas

²² <http://www.deprisa.com//Tracking/index/?track=999025399102>

Expediente: 70-001-23-33-000-2016-00161-00
Acción: TUTELA
Accionante: ELENA AURORA MARTÍNEZ VELÁSQUEZ
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL
Tema: DERECHO DE PETICIÓN

en líneas atrás, dentro de los cuales debió pronunciarse de fondo sobre la misma, término que vencían el día 15 de marzo siguiente.

Ahora, aduce la señora MARTÍNEZ VELÁSQUEZ que su petición no le ha sido resuelta; lo cual no fue desvirtuado en ningún momento por la parte accionada, toda vez que nunca se pronunció durante el término previsto en la presente acción constitucional.

Al respecto, los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991²³, señalan que el juez que conozca de la solicitud de tutela, puede requerir un informe a la autoridad demandada. Si ese informe no es rendido dentro del plazo correspondiente, *“se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime otra averiguación previa”*.

Así las cosas, considera la Sala que, ante la falta de respuesta por parte de la accionada de la acción de referencia, se tendrán como ciertos los hechos contenidos en el libelo de la acción, en el sentido de que vulnera el derecho de petición de la señora MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, por no darle respuesta a la misma dentro de los quince días siguientes a su interposición, atendiendo lo dispuesto por la ley.

En efecto, cuando se establece un término en el que deben ser resueltas determinadas peticiones, la entidad o personas encargadas de resolverlas, deben adelantar dentro de los plazos establecidos todas las gestiones pertinentes para recopilar la información necesaria a fin de brindar una respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado, situación que en el presente caso, permite concluir que se ha desconocido, como quiera que han transcurrido más de un mes, sin que se haya emitido una respuesta a la petición de la señora MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, y ésta tiene derecho a conocer la misma.

Así las cosas, considera la Sala que, la entidad accionada vulneró el derecho de petición de la accionante y al debido proceso, en tanto ha tardado más del tiempo legal en dar respuesta a una petición que debió resolverse en quince días, de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia constitucional.

IX. CONCLUSIÓN

Corolario de lo anterior, la respuesta al problema jurídico planteado ad initio es positiva, en razón a que el Ministerio de Defensa – Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, no demostró haber resuelto en los términos de ley la solicitud impetrada por

²³ “Artículo 19. Informes: El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviarlas pruebas al juez acarreará responsabilidad. El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sea la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los informes se entenderán rendidos bajo juramento”.

